



REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso:	Ordinario Laboral
Radicación:	05001-31-05-022-2017-00393-01
Demandante:	Jairo Arturo Urrego
Demandado:	Colpensiones
Asunto:	Apelación Sentencia
Procedencia:	Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín
Magistrada ponente:	Sandra María Rojas Manrique
Temas:	Pensión de jubilación Ley 33 de 1985- trabajador oficial

Medellín, junio veinticuatro (24) de dos mil veintidós (2022)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES, en ausencia justificada, VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada ponente, procede, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, a decidir los recursos de apelación interpuestos por las partes, así como el grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones en los aspectos no apelados, respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín, el 14 de septiembre de 2021, en el proceso ordinario laboral instaurado por el señor JAIRO ARTURO URREGO

en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES. Radicado 05001-31-05-022-2022-00393

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

El señor JAIRO ARTURO URREGO, llamó a juicio a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, pretendiendo que previa declaración del derecho, se condene a la demanda al reconocimiento y pago de la pensión de vejez en forma retroactiva, a partir del 18 de julio de 2007, con los intereses moratorios.

Como sustento de tales pedimentos, se indicó, en síntesis, que el señor JAIRO ARTURO URREGO, nació el 18 de julio de 1952; cumpliendo con el requisito de la edad para ser acreedor de la pensión de vejez; que se encuentra afiliado a la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES desde el 01 de abril de 1996 cotizando hasta el 31 de julio de 2016, con un total parcial de 657.14 semanas validamente cotizadas, ostentando la calidad de trabajador oficial del Municipio de Peque Antioquia; que según certificado de información laboral para bono pensional expedido por la entidad pública acredita una vinculación en el cargo de obrero del 01 de marzo de 1980 al 19 de enero de 2016; que presentó renuncia irrevocable al cargo el 25 de junio de 2016 y el 03 de marzo de 2016, radicó ante Colpensiones la solicitud de pensión de vejez, respecto a la cual se emitió oficio BZ2016-20182530-0590399 en la misma fecha de radicación, sin dar respuesta efectiva.

1.2.- CONTESTACIÓN

Por conducto de su representante legal y a través de apoderada, oportunamente COLPENSIONES responde el escrito impulsor, manifestando que los hechos del libelo incoativo de la acción son ciertos según se desprende de la prueba documental aportada por el demandante.

Se opone a las pretensiones proponiendo las excepciones de inexistencia de la indexación de las condenas; buena fe de Colpensiones; prescripción e imposibilidad de condena en costas.

1.3.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín, decide el litigio mediante sentencia proferida el 14 de septiembre de 2021, por medio de la cual declaró que el señor JAIRO ARTURO URREGO, tiene derecho a pensión vitalicia de vejez, desde julio 25 del año 2010, como beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la ley 100 de 1993, en aplicación del artículo 1 de la ley 33 de 1985; prestación disfrutable por el actor desde julio 25 del año 2016, a razón de 14 mesadas por año, cada una del valor del salario mínimo mensual legal vigente de cada año calendario; ordenó y autorizó a Colpensiones realizar retenciones por los valores correspondientes para aportes en salud y trasladarlos a la EPS correspondiente; condenó a Colpensiones a pagar la prestación de forma indexada, entre el momento de la causación de cada mesad y el momento del pago efectivo; declaró probada de oficio la excepción de inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993 y las excepciones propuestas por la demandada improbadas; finalmente condenó en costas a la entidad accionada.

1.4. APELACION

El señor apoderado del gestor del proceso, interpone el recurso de apelación, en lo concerniente a la negativa al reconocimiento de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, al señalar el a quo, que el señor Orrego no atendió el requerimiento de la demandada, al respecto argumenta que no sería dable cargarle a la parte débil, un trabajador de un municipio alejado, una obligación que está en manos de las entidades oficiales donde reposa toda la información del tiempo laboral y los salarios, bien es sabido que las administradores de pensiones manejan un departamento de bonos pensionales y hoy en día se maneja un certificado CETI, virtual que las mismas instituciones pueden generar, asegura que pese a que el derecho de pensiones es rogado por el trabajador, estas mismas entidades se encargan de conseguir la información o ratificar los certificados que se allegan ante la misma entidad emisora, explica que no tenía razón requerir al demandante información que en las entidades reposa, acepta que se demostró que en los tres certificados hubo información inconsistente pero no se puede radicar la responsabilidad en el demandante para negarle los intereses moratorios es un trámite que es de las entidades

Por último, cita la sentencia SL1681 de 2020, M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, en la cual se define la procedencia de los intereses moratorios para las pensiones causadas con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993.

Colpensiones

Presenta recurso de apelación, solicitando se revoque la sentencia de primera instancia en tanto el demandante no cumple con la densidad de semanas necesarias para el reconocimiento pensional al contar con 703 semanas cotizadas al sistema, no es beneficiario del régimen de transición, pues no contaba con afiliación al sistema con anterioridad a la Ley 100 de 1993, pues su afiliación data del 01 de enero de 1996.

Afirma que, en el caso de que el Tribunal decida confirmar el reconocimiento pensional, solicita se mantenga la decisión de no reconocer los intereses moratorios, dado que, aunque al proceso se allegaron diferentes certificaciones de tiempo de servicio, al momento de formular la reclamación administrativa se le indicó al demandante que existían inconsistencias en las certificaciones laborales y se le indicó que una vez se efectuaran las correcciones podía solicitar el reconocimiento, sin que el actor, siendo su carga, procediera a realizar dichas gestiones, motivo por el cual no habría lugar al reconocimiento de intereses, teniendo en cuenta, que es necesario que al momento de la solicitud pensional se hayan aportado los documentos requeridos para llegar a un convencimiento claro, asegura que si la solicitud carece de ello se entenderá que es incompleta y si pese al requerimiento el afiliado es indiferente a cumplirlo se entiende el desistimiento de la solicitud, pudiéndose afirmar que, en el caso, la solicitud fue desistida.

1.5. ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal el señor apoderado del demandante se pronunció recabando sobre el cumplimiento por parte del demandante de los requisitos exigidos por la ley 100 de 1993, en su artículo 36, en concordancia con el acto legislativo 01 de 2005, que lo hacen beneficiario del Régimen de transición y con ello de la aplicación de la ley 33 de 1985, ley pensional de los servidores públicos; la cual, exige 55 años de edad cumplidos y 20 años servicio al ente público. De otra parte reitera los planteamientos que sustentan su apelación en torno a la procedencia de los intereses moratorios aplicables aún a las pensiones reconocidas bajo regímenes anteriores a la Ley 100 de 1993 y la obligación legal que le asiste a las administradoras de pensiones de verificar o ratificar ante las entidades públicas emisoras o empleadoras la información laboral certificada; la cual está consagrada, entre otras normas, en la ley 100 de

1993, el Decreto 013 de 2001, y el Decreto 1833 del 10 noviembre de 2016, modificado por el Decreto 726 de 26 de abril de 2018.

Por su parte Colpensiones, se pronuncia puntualizando la improcedencia de la condena a reconocer y pagar intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, reiterado que la solicitud fue incompleta pues no se aportaron los documentos necesarios para llegar a un convencimiento respecto del derecho reclamado; razón por la cual, no es dable afirmar que hay mora por parte de Colpensiones toda vez que no hubo solicitud respecto de la cual estuviera avocada a reconocer la pensión, máxime si se tiene en cuenta que los intereses moratorios se causan a partir del vencimiento del término que tiene la Entidad para resolver la solicitud de reconocimiento pensional, lo que evidencia que la génesis de la mora se retrotrae a la petición, pero aquella que es acompañada de los documentos e información requeridos por la ley.

2. CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con lo resuelto de más; de conformidad con el art 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

Igualmente procede la consulta, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social que dispone *“Las sentencias de primera instancia, cuando fueren totalmente adversas a las pretensiones del trabajador, afiliado o beneficiario serán necesariamente consultadas con el respectivo Tribunal si no fueren apeladas.”*

2.2.- HECHOS NO DISCUTIDOS EN LA INSTANCIA

No son objeto de controversia los siguientes supuestos fácticos, los cuales se hallan acreditados:

- Que el demandante nació el 18 de julio de 1953, conforme a la copia de su registro civil de nacimiento, visible en archivo 1 del documento 17.2017-00393 *contenido CD fs. 57 expediente administrativo.pdf*.
- Que el promotor del proceso acredita un total de 703.29 semanas efectivamente cotizadas en Colpensiones, del 01 de abril de 1996 al 25 de julio de 2016, conforme a la historia laboral, expedida el 08 de febrero de 2020, y glosada a *folios 2 y ss. del documento 45.2017-00393 memorial aporta historia laboral pdf*.
- Que el demandante prestó sus servicios al Municipio de Peque Antioquia, como obrero- trabajador oficial- adscrito al Departamento de Planeación y Obras Públicas del 25 de julio de 1990 al 25 de julio de 2016, según certificación laboral emitida por el Secretario General y de Gobierno del Municipio de Peque, *véase folio 3. del documento 33.2017-00393 respuesta oficio pdf*.
- Que el demandante radicó solicitud de pensión de vejez, el 03 de marzo de 2016, tal como consta en los documentos de folios 35 y 37 del *documento 03.2017-00393 anexos demanda.pdf*.

2.3. PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER

Deberá la Sala determinar:

¿Si la sentencia proferida en el presente proceso por el señor Juez Veintidós Laboral del Circuito de Medellín, se encuentra ajustada a derecho?

¿Si el demandante es beneficiario del régimen de transición pensional no obstante solo registrar afiliación al ISS a partir del 01 de abril de 1996?

¿Si el demandante cumple los requisitos para acceder a la pensión legal de jubilación prevista en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985?

¿Si tiene derecho el accionante a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993?

2.4. TESIS

Problemas jurídicos que se resuelven bajo la tesis según la cual i) el demandante es beneficiario del régimen de transición pensional, encontrándose cobijado por el régimen de la Ley 33 de 1985 ii) el pretensor cumple con los requisitos para acceder a la pensión de jubilación, teniendo como fecha de causación del derecho el 25 de julio de 2008 iii) no se causan los intereses moratorios al no haberse cumplimentado el requerimiento de la entidad fechado el 24 de mayo de 2016, a efecto de dar trámite al estudio pensional. En consecuencia, la sentencia se encuentra ajustada a derecho y debe ser CONFIRMADA, como se explica.

2.5. PREMISAS NORMATIVAS

Por regla general, el derecho a la pensión de vejez, en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, se adquiere una vez confluyen los requisitos de edad y número de cotizaciones o tiempo de servicio señalado por el legislador en la norma vigente para el momento en que se origina el derecho.

Por excepción y para mitigar el impacto del cambio normativo el legislador consagró un régimen de transición, entratándose de la citada prestación, en protección de la expectativa legítima de quienes se encuentran próximos a consolidar su derecho pensional bajo las normas derogadas.

En esta perspectiva el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 preceptúa:

“...La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados...”

Respecto a la definición del “régimen anterior al cual se encuentren afiliados” la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha precisado que resulta necesario que al asegurado acredite la afiliación previa al régimen cuya aplicación pretende, así se planteó en sentencia SL6557-2017

“Sobre este tema la jurisprudencia de la Sala se ha pronunciado, en el sentido de señalar como resultado de la hermenéutica impartida al artículo 36 de la Ley 100 citado, que un correcto entendimiento del precepto conduce a que la aplicación de un régimen pensional precedente reclama de parte del interesado su pertenencia a él antes de la entrada en vigor del sistema general de pensiones, es decir, tiene que haberlo cobijado en algún momento en que ese régimen anterior tuvo vigencia, por cuanto no es dable derivar un derecho de una condición que nunca se tuvo. Esta situación es distinta a la circunstancia de no ser cotizante activo a 1º de abril de 1994, pues en esta hipótesis la persona sí pertenecía a algún régimen, pero no se encontraba sufragando aportes al momento del tránsito legislativo.

En similar sentido en sentencia SL 3971 Radicación 78890 del 8 de septiembre del 2021, iteró:

...“Sobre el particular, esta Sala de la Corte ha insistido en memorar su criterio vigente y pacífico, según el cual para favorecerse del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, rigurosamente el actor debe haber estado afiliado al sistema anterior con el que pretenda pensionarse, ya que es el que genera una expectativa legítima susceptible de protección legal, que es, por demás, la garantía de remisión, preservación y aplicación de regímenes pensionales anteriores que subyace a esa figura legal, y así, precisamente, fue recientemente recordado en sentencia CSJ SL3045-2021, la cual resolvió un caso con similares contornos.

Así, pues, de cara a lo antes dicho, mal haría esta Sala inobservar el precedente traído a colación, y consecuentemente, dar una solución a la controversia, exclusivamente, acudiendo a la anhelada sumatoria de tiempos públicos con los cotizados al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, para acceder a la prestación conforme al Acuerdo 049 de 1990, pues, se insiste, ello solo es posible si el demandante, en efecto, realizó cotizaciones al ISS antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, situación que en el sub lite no acontece.”

2.6. CASO CONCRETO

2.6.1. Aplicación del régimen de transición

Teniendo en cuenta que el demandante, nació el 12 de julio de 1953 y para el 01 de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, contaba con 41 años de edad, es beneficiario del régimen de transición, condición que, en principio le permite acceder al derecho pensional bajo las reglas de edad, tiempo de servicio y monto de la pensión del régimen anterior al cual se encontraba afiliado.

Asimismo, el accionante conserva el régimen de transición bajo los lineamientos del acto legislativo 01 de 2005, en tanto su derecho se causaría con anterioridad al 31 de julio de 2010, sin que le sea exigible acreditar 750 semanas cotizadas al 29 de julio de 2005, no obstante, se advierte que el a quo consideró

aplicable la disposición concluyendo que el señor Urrego, cumple con el requisito precitado, al contar con 783 semanas cotizadas en el referido hito temporal.

De otra parte, se tiene demostrado que el demandante se afilió al ISS el 01 de abril de 1996, según acreditan las historias laborales de *folios 5 del documento 02.2017-00393 Anexos demanda.pdf. y folios 2 y ss. del documento 45.2017-00393 memorial aporta historia laboral pdf.*, siendo esta la razón del disenso de la apoderada de Colpensiones, pues afirma que para aplicar el régimen de transición al demandante, el mismo debía estar afiliado al ISS, al 01 de abril de 1994, disquisición que no resulta acertada en el caso bajo examen, porque si bien, como se expuso en párrafos anteriores, una de las premisas del régimen de transición lo es que el asegurado se encontrara cobijado por el régimen anterior derogado, en el sublite es claro que el accionante no pretende la aplicación del Decreto 758 de 1990 sino del régimen legal previsto en la Ley 33 de 1985, en su calidad de trabajador oficial, y en esa medida la exigencia se contrae a su vinculación a una entidad pública con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, sin que se requiera la afiliación previa al Instituto de Seguros Sociales.

De cara a lo anterior, se tiene que la referida condición está plenamente demostrada en el plenario, pues el promotor del proceso acredita para el 30 de junio de 1995, fecha de entrada en vigencia del sistema general de pensiones para el sector público territorial, una relación laboral con una entidad del orden local como lo es el Municipio de Pequeto Antioquia, vínculo contractual que data del 25 de julio de 1990.

2.6.2. Cumplimiento de requisitos de la Ley 33 de 1985

La ley 33 de 1985 en su artículo 1, establece como requisitos para acceder a la pensión legal de jubilación, 55 años de edad y 20 años de servicio público, equivalente a 1029 semanas, así:

“ARTÍCULO 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.”

El señor Jairo Arturo Urrego, demostró el cumplimiento de la edad mínima pensional, de 55 años para el 12 de julio de 2008, advirtiéndose por el a quo, la existencia de un error en la fecha de nacimiento que fue registrada en su cédula de ciudadanía, tomando como prueba inequívoca de la data antes indicada el registro civil de nacimiento. En cuanto al segundo requisito atinente al tiempo de servicios, se constata que el Municipio de Peque, certificó que el promotor del proceso prestó sus servicios en forma ininterrumpida entre el 25 de julio de 1990 y el 25 de julio de 2016:

Periodo	Responsable	Total tiempo de servicio	Financiamiento
25 de julio de 1990 al 31 de marzo de 1996	Tiempo público sin cotización a cargo del empleador	5 años, 6 meses y 5 días- 292.14 semanas	Bono pensional tipo B a cargo de la entidad pública territorial
01 de abril de 1996 al 25 de julio de 2016	Tiempo cotizado Al ISS	20 años y 3 meses y 25 días- 1045.04 semanas	Cotizaciones efectivas 703 Cotizaciones en mora, que no registra la historia laboral 342.04 semanas
TOTAL	25 años y 10 meses-1337.18 Semanas		

Se concluye, entonces, que el demandante reúne con suficiencia el tiempo de servicio público requerido para acceder a la pensión de jubilación, sumado el tiempo público sin cotización y los periodos en mora por parte del Municipio de Peque.

Finalmente, revisada la cuantía de la pensión se encuentra que en efecto la misma debe corresponder al salario mínimo legal, tal como lo decidió el fallador de primer grado, teniendo en cuenta que el accionante cotizó sobre valores iguales y aproximados al salario mínimo legal y la tasa de reemplazo a aplicar es del 75%, igualmente la fecha de disfrute lo es la fecha de retiro del servicio mediante Resolución 226 del 25 de julio de 2016, en la cual a su vez el ente territorial reportó la novedad de retiro al sistema pensional.

Los intereses moratorios

La mora tiene, por regla general, una valoración objetiva del término y se da como compensación por los perjuicios que para el afiliado genera el retardo en el reconocimiento y pago de las mesadas pensionales.

No obstante, conforme a las sentencias SL5079-2018, SL061y SL1433 de 2019, no en todos los casos es imperativo condenar a los intereses moratorios, definiendo la Corte una serie de circunstancias excepcionales, en las que se exonera de su pago, entre ellas “Cuando la negativa al reconocimiento pensional cuente con plena justificación y/o un respaldo normativo que en principio regulara la situación”

En este caso se advierte que una vez radicada la solicitud pensional el 03 de marzo de 2016, la demandada emitió el oficio BZ2016-20182530-0590399 a través del cual requirió al demandante para que aportara los formularios 3B en forma completa, véase archivo 14 *documento 17. 201700393 contenido CD FS.57 expediente administrativo*, requerimiento que el demandante no cumplió,

radicándose, posteriormente, por su apoderado, solicitud de nuevo estudio pensional el 24 de mayo de 2016, tal como se constata en los archivos 2 y 16 del citado *documento 17. 201700393 contenido CD FS.57 expediente administrativo*, a la cual anexó derecho de petición, poder, certificado para bono pensional (del 28 de febrero de 2016) y cédula de ciudadanía del accionante.

En la misma fecha Colpensiones emitió respuesta solicitando nuevamente al accionante allegar otros documentos como lo son “-formulario de prestaciones económicas, -copia del documento ampliado al 150%, -copia de la resolución, -recurso en el cual manifieste las causales por las cuales solicita un nuevo estudio” (archivo 16 *expediente administrativo*). Es de precisar que en el derecho de petición radicado el apoderado del accionante indica que Colpensiones resolvió desfavorablemente la solicitud mediante resolución del 03 de marzo de 2016, haciendo, al parecer, referencia inexacta al requerimiento inicial (*archivo 2 ibidem*), no acreditándose que se haya dado respuesta a ese último requerimiento, el cual fue notificado al apoderado del accionante el 31 de mayo de 2016 (*archivo 11 del expediente administrativo*).

La situación anterior se encuentra regulada en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, estatutaria del derecho petición

Artículo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes.

A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término para resolver la petición.

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual.

Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales.

Con esta reflexión se encuentra acertada la decisión de instancia, sin que pueda atenderse el argumento de la parte demandante esgrimido tanto en la apelación como en los alegatos ante esta instancia, pues aunque no se discute que el trámite del bono tipo B, corresponde a la administradora pensional, en este caso se trataba no solo de la solicitud de validación de los tiempos para emisión del referido bono, que debía realizar Colpensiones, sino de que se aportaran otros documentos necesarios para resolver la petición, más aun teniendo en consideración que se estableció en el proceso y así lo acepta el procurador judicial del demandante, que existían inconsistencias en la información contenida en las diferentes certificaciones emitidas por el empleador público y en las historias laborales, respecto a la fecha de vinculación, la fecha de afiliación al ISS y la fecha de retiro, nótese por ejemplo que en el CETIL del 08 de febrero de 2016, se indica como fecha de vinculación del actor el 03 de marzo de 1989 y de desvinculación enero 19 de 2016, en el CETIL del 28 de marzo de 2016, se registra como fecha de inicio del contrato de trabajo el 03 de marzo de 1989 y de terminación el mes de marzo de 2016 y en el documento CETIL fechado el 24 de noviembre de 2018, emitido por el Municipio de Peque para dar respuesta a la solicitud de información realizada por el Despacho cognoscente se señala como extremos de la relación el periodo comprendido entre el 25 de julio de 1990 al 25 de julio de 2016.

Igualmente, como antes se advirtió y lo explicó el a quo, la fecha de nacimiento del gestor del proceso que se registra en la cédula de ciudadanía es el 12 de julio de 1952 y el registro civil de nacimiento da cuenta de que la fecha real es el 12 de julio de 1953.

En este escenario no puede desconocerse la facultad legal de la administradora pensional de requerir información adicional al demandante a efectos de resolver la prestación, la cual éste no allegó generándose, en virtud de ello, el archivo de la solicitud.

Corolario necesario de expuesto debe confirmarse en todas sus disposiciones la sentencia de primera instancia.

3. DECISION

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA

1.- **SE CONFIRMA** la Sentencia objeto de apelación proferida el 14 de septiembre de 2021 por Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín en el proceso ordinario instaurado por el señor JAIRO ARTURO URREGO en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.

2.- Sin costas en esta instancia, por la improsperidad de la alzada.

3.- Se ordena la devolución del expediente digital al Juzgado de origen

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,


SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE

JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES
En ausencia justificada


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO